



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, nueve (09) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 33 33 004 2018 00109 00
Accionante: Víctor Emilio Pedraza Chaparro
Accionado: Municipio de Tunja.

ASUNTO A RESOLVER

Ingresa el proceso con informe secretarial de 16 de julio de 2018 en el que se señaló que la parte demandante, presentó subsanación de la demanda.

CONSIDERACIONES

Mediante providencia de 21 de junio de 2018 (f. 21-23) se inadmitió el presente medio de control y se concedió a la parte demandante el término de diez (10) días para que subsanara los defectos allí anotados, consistentes en:

1. Falta de claridad en cuanto al medio de control que pretende impetrar o en su defecto observar lo dispuesto en cuanto a la acumulación de pretensiones en el artículo 165 de la misma disposición normativa y enunciar en forma separada el restablecimiento que se desprende de la declaratoria de nulidad y las condenas que a su juicio deben imponerse a su favor.
2. Al tratarse de actos expedidos en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo adelantado por el Municipio de Tunja en contra del demandante, se le pidió al accionante solicitar la nulidad de alguno de los actos administrativos establecidos en el artículo 101 ibídem, es decir los que: i) decidan las excepciones a favor del deudor, ii) ordenen seguir a delante con la ejecución, y/o iii) liquiden el crédito.
3. Determinar, clasificar y enumerar los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones.
4. Efectuar la estimación razonada de la cuantía, observando las pautas contenidas en el artículo 157 de la ley 1437.
5. Explicar de manera adecuada, precisa y suficiente el concepto de violación.

Según se advierte a folio 37 del plenario, la providencia inadmisoria fue notificada en estado No. 33 de 22 de junio de 2018, por lo que el término para presentar escrito de subsanación vencía el 09 de julio del mismo año.

De manera oportuna el accionante presentó escrito mediante el cual pretendía subsanar los yerros de la demanda (fls. 25-28), no obstante, de la revisión del mismo se desprende que este no cumple con los derroteros señalados en la providencia, por las razones que a continuación se explican:

1. En el escrito de subsanación la pretensión primera, literalmente indica:

“PRIMERA: que se decrete la nulidad en todas y cada una de sus partes de la decisión del acto administrativo de fecha 3 de Abril del año 2018. En el sentido que no son diecisiete millones quinientos treinta mil quinientos setenta pesos M/te. (17.530.570) teniendo en cuenta que lo adecuado es tres millones cuatrocientos veintitrés mil trescientos treinta y cinco pesos M/cte. (3.423.335). De acuerdo a lo plasmado en los hechos anteriores por cuanto la administración por cuanto la administración no tuvo en cuenta y se sobre excedió en las medidas cautelares”

Revidado el acápite se encuentra que, esta es la única solicitud de nulidad y recae sobre el monto establecido como límite del embargo en la diligencia de secuestro llevada al cabo de 03 de abril de 2018, circunstancia de la cual diáfananamente se desprende que no se acató lo referente al primer ítem a corregir, por cuanto no se ofreció claridad alguna en cuanto al medio de control que se pretende impetrar, pues solicita la nulidad de un supuesto acto administrativo, pero en realidad el escrito corresponde al acta levantada con ocasión de la diligencia de secuestro, donde según el actor, se señaló el límite del embargo decretado mediante la resolución 0262 de 10 de julio de 2017. (Fls.5-6).

Es de resaltar que, se desconoce si dicho monto fue determinado en la diligencia o se encuentra contenido en la Resolución No. 012 de 02 de abril de 2018, mediante la cual se decretó el secuestro pues, la misma no fue acercada al expediente, pero se tiene conocimiento de su existencia gracias a que fue citada en los considerandos de la Resolución No. 028 de 30 de abril de 2017 obrante en folios 8 a 11 del expediente.

De manera que como se anunció en la providencia inadmisoria, si el accionante considera que le fueron causados perjuicios por un hecho u omisión de la administración en el transcurso del cumplimiento de un acto administrativo, debió hacer uso del medio de control de reparación directa, ajustando los hechos y las pretensiones al mismo, o de considerarlo más apropiado recurrir a la figura de acumulación de pretensiones prevista en el artículo 165 del C.P.A.C.A, pero para ello se requiere ser claro y conciso en cuanto a los actos administrativos que se atacan, el restablecimiento del derecho que se busca con su nulidad, los hechos constitutivos del daño y la reparación que se pretende, aspectos abiertamente desconocidos en el escrito de subsanación; resultando palmaria la falta de corrección de este defecto.

2. En gracia de discusión, de llegar aceptar que la estimación del monto límite del embargo es un acto administrativo, es palmario que este no corresponde a ninguno de los enlistados en el artículo 101 del C.P.A.C.A, en especial no se trata de la liquidación del crédito, pues esa actuación al parecer se surtió con anterioridad obteniendo la suma de \$7.012.228, ya que en la Resolución No. 028 de 30 de abril de 2018, hace referencia al artículo 593 del Estatuto Tributario y al artículo 599 del C.G.P y en aplicación de los mismos se concluye:

“... el valor de la obligación oscila por un valor de SIETE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE (\$7.012.228) en aplicación a los precedentes artículos, una vez multiplicado este valor por el doble más el 0.5 equivalente a las costas del proceso, el límite del embargo del proceso equivale a una cuantía de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M7CTE (\$17.530.570).”.

Es de aclarar que el artículo 446 del Estatuto Procesal establece el procedimiento para efectuar la liquidación del crédito y de las costas, el cual, según la norma, debe realizarse una vez se encuentre ejecutoriado el auto de ordena seguir adelante con la ejecución, actuación que dentro del procedimiento de cobro coactivo que da origen a este litigio, se llevó a cabo mediante la resolución No. SH4-70-0629 de 25 de julio de 2013¹, acto que no se acusa en la presente demanda y que necesariamente, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 830 y subsiguientes del Estatuto Tributario, es posterior a la decisión de excepciones presentadas contra el mandamiento de pago.

Por su parte el límite del embargo, tal como se dice en la resolución arriba mencionada, debe ajustarse a las disposiciones del artículo 599 del C.G.P, norma que al respecto señala: “...el valor de los bienes no podrá exceder el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas...”.

Por tanto, el acto administrativo que decide la liquidación del crédito tiene un momento procesal y una regulación normativa específicos y que son diametralmente distintos a la determinación de fijar límite del embargo, por cuanto la primera debe surtirse dentro del cobro coactivo propiamente dicho y la segunda tiene lugar únicamente cuando dentro del mismo se decreta un embargo, coligiéndose de lo anterior la improcedencia de la presente demanda, pues no se acató la solicitud del despacho en cuanto a demandar uno de las decisiones que según el ordenamiento jurídico, cuando se trata de procedimientos administrativos de cobro coactivo, son susceptibles de control jurisdiccional.

Ahora bien, no desconoce este despacho que la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha estipulado que además de los actos administrativos señalados en el citado artículo 101, pueden atacarse otros actos creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, al respecto dijo:

“...la jurisprudencia de esta Corporación ha ampliado el control judicial a otros actos administrativos, que si bien son dictados en el curso de un proceso administrativo de cobro coactivo no persiguen la simple ejecución de la obligación tributaria sino que crean una situación diferente, como ocurre con el acto que liquida el crédito² y las costas y el aprobatorio del remate. Este criterio, desarrollado con anterioridad a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tiene como finalidad la protección de aquellas actuaciones surgidas en desarrollo del

¹ Así se señala en la Resolución No. 0262 de 10 de julio de 2017, por medio de la cual se decretó el embargo del bien inmueble de propiedad del actor (fl. 28).

² Antes de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la jurisprudencia de la Sección Cuarta ya había aceptado que los actos que liquidan el crédito y las costas son susceptibles de control judicial, aunque no estuvieran incluidos en el artículo 835 del Estatuto Tributario.

proceso administrativo de cobro coactivo que, como se indicó, no son de simple ejecución o de trámite porque crean, modifican o extinguen una situación jurídica independiente que merece ser controvertida en sede judicial, aunque no se trate de las permitidas por los artículos 101 del CPACA y 835 del ET³.” (Subrayas del Despacho)

Entonces, si bien jurisprudencialmente el estudio de legalidad por parte de la autoridad judicial se ha extendido a actos administrativos proferidos en el transcurso de un procedimiento administrativo coactivo, diferentes a los dispuestos en la ley 1437 de 2011 y en el Estatuto Tributario, estos deben tener dos características indispensables i) no perseguir la simple ejecución de la obligación tributaria sino que crean una situación diferente y ii) crear, modificar o extinguir una situación jurídica independiente.

Características que no cumplen las Resoluciones Nos. 0262 de 10 de julio de 2017 por medio de la cual se decretó el embargo, 012 de 02 de abril de 2018 que decretó el secuestro del mismo, o la decisión de fijar límite al embargo, y tampoco la 028 de 30 de abril de 2018, por medio de la cual se decidió recurso de oposición al secuestro y avaluó de bien inmueble, pues estas se encuentran encaminadas al recaudo de la obligación y no crea, extingue o modifica situación jurídica alguna del demandante, mucho menos pone fin a la actuación administrativa, por lo que en consecuencia se consideran meros actos de trámite, situación que imposibilita el estudio de su legalidad en lo referente a la imposición de la medida cautelar y el límite impuesto al embargo.

De otra parte, una particularidad que nota este estrado judicial y que es del caso mencionar se refiere a lo manifestado por la administración municipal en la parte motiva de la Resolución No. 028 de 30 de junio de 2018, en cuanto a la no configuración de la prescripción de la acción de cobro, asunto sobre el cual sería imposible entablar un litigio, dado que aunque resuelve de fondo una situación jurídica concreta del contribuyente, en específico niega una de las excepciones previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario; este asunto no fue puesto en consideración del despacho y sobre el mismo no se hizo mención ni en el escrito introductorio, ni en el de subsanación.

Lo anterior encuentra respaldo en que pesar de haber solicitado la nulidad de dicha Resolución en el escrito de demanda, esto se hizo con el fin de que se examinara lo atinente al monto impuesto como límite al embargo, guardando total silencio respecto del tema de la prescripción; motivo que llevó al despacho a dictar auto inadmisorio explicando los tipos de actos que pueden demandarse en el marco de un procedimiento de cobro coactivo, buscando entre otras cosas reformulara las solicitudes de nulidad.

Sin embargo, el abogado demandante no corrigió tal circunstancia, por el contrario se limitó a enunciar la Resolución No. 028 de 30 de junio de 2018 en los hechos, pero

³ Sobre el tema existen varias providencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, entre las que se destacan las siguientes: Auto de 24 de octubre de 2013, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 2009-00138-01(18567), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; Sentencia del 25 de junio de 2012, Exp. 2010-02347-01(18860), C.P. William Giraldo Giraldo; Sentencia del 2 de diciembre de 2010, Exp. 2008-00036-01 (18148), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; Sentencia del 15 de abril de 2010, Exp. 2006-01246-01 (17105), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Exp. 2007-00184-01 (14426), C.P. Héctor Romero Díaz; Sentencia del 29 de noviembre de 2009, Exp. 2004-02243-01 (16970), C.P. Héctor Romero Díaz; Sentencia del 24 de noviembre de 2007, Exp. 2006-01128-01 (16669), C.P. María Inés Ortiz Barbosa

omitió acusar de ilegal este acto administrativo. Además, como se lee en los capítulos de pretensiones, tanto de la demanda como de la subsanación, la solicitud de nulidad se limita a lo referente a la suma impuesta como límite al embargo y busca se fije la suma real que a su juicio adeuda, y en consecuencia este es el único aspecto sobre el cual puede pronunciarse el despacho, ello en aplicación del principio de justicia rogada que rige esta Jurisdicción, según el cual el fallador debe limitarse a estudiar las acusaciones planteadas por el accionante en la demanda ⁴ y por ende carece de competencia para analizar un acto que no se acusa, pues está restringido por el escrito introductorio, el cual configura el marco de la Litis.

3. Si bien los hechos fueron determinados clasificados y enumerados, estos no brindan claridad de las circunstancias fácticas que dan origen a la demanda, y tampoco ofrecen fundamento a las pretensiones, así mismo contienen apreciaciones subjetivas, lo que lleva a colegir que, adicional a lo ya expuesto el abogado demandante omitió también corregir este ítem en debida forma.
4. A pesar de que se señaló una suma correspondiente a la cuantía, al hacerlo no se observaron las pautas contenidas en el artículo 157 de la ley 1437, en la medida que se limita a indicar que corresponde a \$300.000.000, pues es el valor comercial de su inmueble, olvidando que la norma en cita, señala que la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor al momento de la demanda sin tener en cuenta frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad, por consiguiente el valor señalado no tiene relación alguna con lo pedido.
5. Tampoco se explicar de manera adecuada, precisa y suficiente el concepto de violación, pues nuevamente se limitó a relacionar una serie de normas, **sin explicar** cómo las mismas son desconocidas por el Municipio de Tunja.

Atendiendo a lo expuesto es evidente que los yerros del escrito de la demanda no fueron subsanados, y dado que el actor no es claro en cuanto al medio de control que busca se adelante ante esta jurisdicción, y además ninguno de los actos que menciona es susceptible con control por parte del juez contencioso administrativo, en lo ateniendo al valor fijado como límite del embargo, haciéndose obligatorio proceder al rechazo de la demanda, pues, se incumplen los requisitos previos para demandar, haciendo imposible dar trámite a la misma.

El Despacho debe recordar que el artículo 169 ibídem, establece los casos en que la demanda debe ser rechazada, esa norma prevé:

Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

- 1. Cuando hubiere operado la caducidad.*
- 2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.*

⁴ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00203-02.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. (Negrilla fuera de texto)

La Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo, ha manifestado que cuando la corrección de la demanda ordenada en providencia inadmisoria no es adecuada o no se realiza, procede su rechazo. Concretamente en auto de 23 de febrero de 2017, dentro del proceso con Radicación: 110010326000201600081 00, decidió rechazar la demanda en razón a que la corrección presentada por la parte actora no satisfizo los defectos anotados en el auto inadmisorio comoquiera que, en dicha oportunidad, *“no se esgrimieron pretensiones tendientes a restablecer el derecho subjetivo y, de otro, no se allegó la constancia de la audiencia de conciliación extrajudicial.”*⁵

En el sub examine, la parte actora, ni recurrió la providencia que inadmitió la demanda, ni la subsanó en debida forma, razón por cual de conformidad con la norma y jurisprudencia en cita procede el rechazo de la demanda al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 169 del CPACA.

RESUELVE:

Primero: Rechazar la demanda presentada por el señor Víctor Emilio Pedraza Chaparro contra el Municipio de Tunja, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvase los anexos de la demanda sin necesidad de desglose.

Tercero: Notifíquese este auto en los términos del artículo 201 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase.

LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
JUEZA

6CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR
ESTADO ELECTRÓNICO
Nº 41 De Hoy 09 de agosto de 2018
A LAS 8:00 a.m.
FERNÉY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

⁵ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 11001-03-26-000-2016-00081-00 (57062) A.

* Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 09 de agosto de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Fernéy Mauricio Díaz Hernández – Secretario